

El millonario gasto en diésel que Chile necesita disminuir para optimizar su matriz energética



Según los cálculos de los expertos, se estima que Chile necesitaría una capacidad instalada de no más de 400 MW generados con diésel.

El país tiene capacidad instalada para inyectar unos 4.000 megawatts al sistema eléctrico nacional generados con diésel, que se usan como respaldo en casos de emergencia. Sin embargo, los estudios muestran que se requiere menos de la cuarta parte de esa cifra. Mantener toda la infraestructura implica sobrepagar US\$ 143 millones al año: un problema que se ha agudizado en medio de la crisis mundial por los precios del petróleo.

Por *Magdalena Andrade*

Para los chilenos que tienen un auto que funciona con diésel, el jueves pasado fue un mal día: el combustible se anotó un alza de \$36 por litro, que se suman a los \$580 de finales de marzo.

Con una contingencia marcada por los vaivenes en el precio del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente, revive una gran pregunta: ¿Cuánto puede permitirse Chile depender de un producto que debe importar casi en su totalidad y cuánto falta para poder reemplazarlo por energías limpias y locales?

La respuesta es compleja, pero, en el caso de la electricidad, además es crítica. Según cifras de Chile Sustentable, en 2025 “el 64% de la energía que se inyectó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) fue generada a partir de energías renovables (solar, eólica e hidráulica). El resto fue a partir de energías térmicas (carbón, gas y diésel)”, afirma Sara Larraín, directora de la fundación.

Dada la naturaleza de las energías renovables -que dependen de las condiciones climáticas-, aún existe una cuota de centrales que producen electricidad a partir de combustibles fósiles.

Por esta razón, hoy el sistema, que cuenta con una capacidad instalada total de unos 40 mil megawatts, mantiene un 10% -3.895 MW, de acuerdo con las estadísticas de la Comisión Nacional de Energía- de centrales diésel, la forma más cara de producción.

La función de estas instalaciones es reforzar el sistema en caso de sobredemanda o emergencia. Sin embargo, un estudio realizado a mediados de 2025 por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, por encargo de Chile Sustentable, estableció que existe una sobrecapacidad. “El SEN no necesita esos 3.895 MW; en el blackout que sufrió el país en febrero de ese año apenas se usaron 895 MW”, dice Jaime Toledo, presidente de la Asociación de Generación Renovable (AGR) y director general de ACCIONA Energía para Sudamérica.

Pero ese no es el único problema. “Los incentivos de mercado están funcionando en otra dirección. Por un lado se habla de la necesidad de la descarbonización, pero por otro, hay una distorsión que incentiva la sobreinstalación y permanencia de centrales diésel”, explica Rodrigo Moreno, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, director del Centro de Energía Enlace y coautor del estudio de Chile Sustentable.

¿La razón? El sistema paga mensualmente a estas centrales sólo por existir, aun cuando no inyecten energía. Y cuando lo hacen en los peaks de demanda, en momentos en que no hay otra tecnología que pueda inyectar energía, el precio de la electricidad que se vende en el mercado spot se cobra a “precio diésel”, advierte Sara Larraín.

Rodrigo Moreno habla, además, de otra desventaja de las centrales diésel: sus instalaciones, en varios casos, corresponden

“Si hubiese menos capacidad instalada en base a diésel, las tecnologías renovables podrían tener un mayor incentivo para su desarrollo”.
Jaime Toledo, AGR.

a máquinas compradas de segunda mano. “El pago por capacidad no discrimina si la máquina es nueva o usada. Compramos usado, pero te pagan como si fuera nuevo, y esto juega en contra al sistema, porque es menos confiable y lo que se necesita, precisamente, es un servicio que asegure confiabilidad”, dice.

Los estudios muestran, también, que incluso si el país necesitara de forma urgente esos 4.000 MW de energía diésel para operar sostenidamente, las centrales no tienen ni contratos de combustible permanente ni el país cuenta con la logística necesaria para responder a esa demanda de combustible, explica el académico.

“Es una gran estafa. Tanto las personas como los clientes libres estamos pagando por un servicio que no tiene respaldo, ni contrato ni capacidad”, agrega Sara Larraín.

Regulación vs. interés público

La realidad actual es que las centrales a diésel “estarían recibiendo en exceso pagos de potencia por US\$ 143 millones al año. Esto afecta los ingresos de las centrales renovables y de los sistemas de almacenamiento asociados

a ellas, activos que aseguran la autonomía energética del país a un precio mucho menor que el petróleo diésel”, afirma el presidente de AGR, Jaime Toledo.

En un escenario global en que las renovables surgen como alternativa fiable para la soberanía energética -por costo, eficiencia y sostenibilidad- Sara Larraín, de Chile Sustentable, dice que es hora de que la capacidad instalada para enfrentar peaks sea también a base de energía solar, eólica o hidráulica, ya que existe la capacidad para su óptimo almacenamiento: “La que ya está operando y que se declara en construcción para este año 2026 es de 6.193 MW”.

¿Qué falta para dar ese paso? Según la mirada de Rodrigo Moreno, “este es un problema de la regulación eléctrica, que no está alineada con el interés público: depender de combustibles importados es una mala idea, necesitamos aprovechar nuestros recursos propios y asegurar que el diseño de mercado esté alineado para empujar iniciativas costo-efectivas en esa dirección, sin sobre remunerar a las centrales diésel”.

“Si hubiese menos capacidad instalada en base a diésel o si se pagara sólo a las unidades que están en condiciones de operar y que realmente son necesarias, las tecnologías renovables podrían tener un mayor incentivo para su desarrollo y, con ello, seguir aportando a la reducción de emisiones y la transición energética del país hacia la carbono-neutralidad”, concluye Jaime Toledo.